

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA



Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

ACCIÓN DE LESIVIDAD

EXPEDIENTE: 2021 00174

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES VS.
NANCY GRACIELA MURILLO VERGARA**

Ingresa al Despacho la demanda presentada por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra de la señora **NANCY GRACIELA MURILLO VERGARA**, para pronunciarse sobre el **RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN** interpuesto por el apoderado de la entidad actora el 15 de julio de 2021, en contra del auto del 13 de julio de 2021, por el cual se negó la medida cautelar solicitada.

Sea lo primero indicar que el **RECURSO DE REPOSICIÓN** es procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del C.P.A.C.A. modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021 que establece: *“El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.”* Y que éste se presentó en el término legal establecido, esto es, dentro de los tres (3) días días siguientes a la notificación del acto acusado, tal y como lo establece el artículo 318 del C.G.P aplicable por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A. Por lo que se procederá con su estudio de fondo, antes de establecer si debe concederse, de manera subsidiaria, el recurso de APELACIÓN; entre el Despacho a emitir el pronunciamiento correspondiente, previas las siguientes:

I. CONSIDERACIONES:

Que mediante auto del 13 de julio de 2021, este Despacho Judicial negó la medida cautelar de suspensión de la Resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020, por la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez a la señora NANCY GRACIELA MURILLO VERGARA, identificada con la C.C. 51.634.710, solicitada por la entidad accionante, al considerar que no habían sido incluidas en la liquidación los meses de julio y agosto de 2020, lo que genera una disminución del IBL y con ello una disminución del valor de la mesada pensional, con respecto al valor inicialmente reconocido.

Para resolver la medida cautelar se consideraron, entre otros, los requisitos formales del artículo 230 y 231 del C.P.A.C.A que establecen que el acto administrativo podría ser suspendido siempre y cuando contraríe de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; de tal suerte, que si se requiere de otra comprobación deberá agotarse en el proceso y definirse al momento en que se dicte la sentencia.¹

De igual manera, se le indicó a la entidad accionante que en el presente caso no se dictó la medida cautelar porque *“Si bien COLPENSIONES argumenta que la prestación fue mal liquidada al no haberse calculado los meses de julio y agosto de 2020, la entidad no acreditó de manera suficiente las razones para decretar la suspensión de la resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020, pues el Consejo de Estado ha sido enfático en establecer que la sustentación a la hora de solicitar una medida cautelar debe ser expresa”* y además porque *“al revisar el material probatorio aportado por COLPENSIONES, este Despacho encontró una liquidación con la que pretende la Administradora sustentar la medida cautelar, pero dicha liquidación se efectuó de manera general y no permitió determinar los errores de la administración al momento de proferir la Resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020; esto por cuanto no mostró como se reliquidó cada uno de los factores salariales devengados por la demandante durante el año 2020 y como debió ser liquidado para determinar de manera clara las falencias”*.

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

De esta forma, en dicha oportunidad se concluyó que el referido *“requiere de un estudio probatorio a fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación que incluye una liquidación minuciosa en arar de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia”*.

II. DEL RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION PRESENTADOS POR LA APODERADA DE LA ENTIDAD:

La apoderada judicial de la accionante presentó recurso de reposición en subsidio de apelación el 15 de julio de 2021, en el que señaló que la entidad emitió la Resolución N° APDPE 166 del 7 de octubre de 2020, en donde se solicitó el consentimiento del titular de la prestación para revocar el acto administrativo demandado, sin obtener pronunciamiento alguno.

Aduce la entidad que el acto administrativo va en contra del ordenamiento jurídico, pues la liquidación de la prestación no fue realizada conforme a derecho, por lo que debe ser suspendida la resolución que reconoce la pensión a la demandada, quien además continúa recibiendo unos dineros reconocidos en forma irregular.

III. TRASLADO DEL RECURSO DE REPOSICION:

Con fecha 27 de julio de 2021, se corrió por secretaría el traslado del recurso de reposición presentado por la entidad demandante, el que fue descorrido por la parte demandada mediante escritos presentados vía email el 28 de julio de 2021 y el 2 de agosto de 2021, en donde se opone a la prosperidad del recurso presentado.

Frente al recurso presentado, el libelista analiza cada uno de los presupuestos establecidos en el artículo 229 y 231 en sus numerales 3 y 4 del C.P.A.C.A., concluyendo que en la jurisdicción Contenciosa Administrativa puede ser solicitada como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, sin embargo para que proceda dicha medida cautelar, deberá ser probado por la parte demandante mediante documentos, informe,

argumentos y justificaciones, la necesidad de su decreto y la razón por la cual de no decretarse sería muy gravoso dentro del proceso judicial.

Que al verificar las medidas cautelares y los recursos presentados, se evidencia que la entidad demandante no realizó ningún esfuerzo en probar, argumentar, presentar documentos o justificaciones que demostraran la procedencia de su decreto, pues únicamente se basa o se limita en mencionar su ilegalidad. De la misma forma indica que no se argumenta ni prueba la necesidad de esa medida cautelar y mucho menos que ese acto administrativo haya sido expedido por medios ilegales.

También indica que no existe proporcionalidad en la medida, porque se está solicitando la suspensión del acto administrativo que reconoce una pensión de vejez por valor de \$2.799.510 por una diferencia de \$2.650 pesos; de la misma forma debe ser tenido en cuenta que al momento del reconocimiento de la pensión, la demandante contaba con 1309 semanas y 58 años de edad, para el reconcomiendo efectuado.

En esta medida considera que no es viable que COLPENSIONES solicite la suspensión de un acto administrativo que cumple con todos los requisitos legales por un error aritmético que esa misma entidad cometió y que de ser así, indefectiblemente conllevaría a afectar los derechos de la demandada, entre ellos, el del mínimo vital.

IV. PARA DECIDIR SE CONSIDERA:

Frente a ello, este Despacho Judicial debe insistir en los argumentos presentados en auto del 13 de julio de 2021, por el cual, se negó la medida cautelar de suspensión de los actos acusados, por varias razones.

Para el estudio correspondiente deberá tenerse en cuenta que la entidad demandante solicita la suspensión de la Resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020, por la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez a la señora NANCY GRACIELA MURILLO VERGARA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.634.710, la que a su sentir debe ser suspendida, ya que la prestación fue liquidada en una proporción mayor a la que se tenía derecho, lo

anterior porque no se habían incluido en la liquidación los meses de julio y agosto de 2020, lo que genera una disminución en el IBL y, con ello, una disminución del valor de la mesada pensión, con respecto al valor inicialmente reconocido.

Así considera la entidad que la prestación fue liquidada y reconocida en la suma de \$2.799.510, cuando en realidad el valor a reconocer para el año 2020, ascendía a \$2.796.860, existiendo una diferencia de \$2.650 pesos para el año 2020.

Frente a estos argumentos presentados, se consideró que si bien COLPENSIONES argumenta que la prestación fue mal liquidada al no haberse calculado los meses de julio y agosto de 2020, la entidad no acreditó de manera suficiente las razones para decretar la suspensión de la resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020, pues el Consejo de Estado ha sido enfático en establecer que la sustentación a la hora de solicitar una medida cautelar debe ser expresa.

Adicionalmente, al revisar el material probatorio aportado por COLPENSIONES, este Despacho encontró una liquidación con la que pretende la Administradora sustentar la medida cautelar, pero dicha liquidación se efectuó de manera general y no permitió determinar los errores de la administración al momento de proferir la Resolución No. SUB166497 del 3 de agosto de 2020; esto por cuanto no mostró como se reliquidó cada uno de los factores salariales devengados por la demandante durante el año 2020 y como debió ser liquidado para determinar de manera clara las falencias.

En otras palabras, esta decisión requiere de un estudio probatorio a fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación que incluye una liquidación minuciosa en aras de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia.

Debe agregarse además a la decisión que antecede, que el decreto de esta medida cautelar no cumple con la proporcionalidad que debe ser verificada para la procedencia de estas, ya que se pretende la suspensión de la Resolución que reconoció una pensión de vejez a la señora NANCY GRACIELA

MURILLO VERGARA, en cuantía de Dos Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Diez Pesos \$2.799.510, por una diferencia mínima **de \$2.650 pesos**, lo que de ser así, iría en contra de los derechos de la aquí demandada, entre ellos, su derecho de defensa, al mínimo vital y derechos adquiridos, pues esta situación no se generó por su causa o por medios fraudulentos, sino al parecer por un actuar errado de la administración, que efectivamente deberá ser verificado en la sentencia, en donde además se deberán delimitar las consecuencias que trajo ese actuar.

Adicionalmente, todos los dineros cancelados en exceso a la demandada, que según la entidad, ascienden a **\$2.650 pesos** mensuales, pueden ser restituidos desde la fecha de su reconocimiento, en virtud a las consideraciones que en el momento correspondiente se hagan, sin que por esa diferencia mínima sea dable suspender la totalidad de la pensión reconocida.

Igualmente, ha de recordarse que el decreto de la Medida cautelar debe obedecer, entre otros a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que este Despacho Judicial considera que es irracional y desproporcionado decretar la medida cautelar en los términos solicitados por la entidad cuando solo existe una desviación de **\$2.650 pesos** pesos en la mesada pensional y no existe discusión del derecho pensional en sí mismo.

Por lo que se debe reiterar que el decreto de las medidas cautelares exige también el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 y los literales a y b del numeral 4 del artículo 231 del C.P.A.C.A que establece:

ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.

(...)

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
- b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.*

En este sentido, la entidad no indicó como el no otorgamiento de la medida cautelar causaba un perjuicio irremediable para la entidad, como el no reconocimiento de la medida cautelar podría tornar nugatorios sus derechos y tampoco realizó un juicio mínimo de ponderación entre el interés público y la medida cautelar, por lo que no la decisión tomada en auto que antecede, no se repondrá.

Finalmente, siendo que el recurso de reposición no está llamado a prosperar, este Despacho Judicial se pronunciará sobre el otorgamiento del **RECURSO DE APELACIÓN** presentado de manera subsidiaria. Al respecto debe señalarse que el numeral 5 del artículo 243 del C.P.A.C.A modificado por el artículo 62 e la Ley 2080 de 2021 señaló:

***Artículo 243. Apelación.** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:*

(...)

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

(...)

***PARÁGRAFO 1o.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.*

Por lo que siendo que el mismo se presentó en los términos del artículo 244 del C.P.A.C.A, y que la Ley contemplo la apelación del auto que niega medidas cautelares, se procederá a conceder el recurso en el efecto devolutivo, para que este sea decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De igual forma, en aplicación de lo establecido en el artículo 324 del C.G.P aplicable a este proceso por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A, se enviará copia del expediente al superior sin que sea necesario realizar alguna reproducción física de este por encontrarse en medio digital.

EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA el recurso de reposición presentado de manera electrónica el 21 de junio de 2021, por el apoderado de la entidad accionante, en contra del auto del 8 de junio de 2021, por el cual se niega la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SE CONCEDE el recurso de **APELACIÓN** en el efecto **DEVOLUTIVO**, presentado por el apoderado de la entidad accionante el 21 de junio de 2021 en contra del auto del 8 de junio de 2021 por el cual se niega la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: se ordena por secretaria **REMITIR** al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, copia del expediente digital para desatar la inconformidad presentada. Lo anterior, en el término máximo de (5) días contados de que quede ejecutoriado de este auto.

CUARTO: Se reconoce al Doctor ALEJANDRO BAEZ ATEHORTUA, identificado con la C.C. 1.019.038.607 de Bogotá y T.P. 251.830 del C.S.J., como apoderado sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en los términos y para los efectos del memorial poder sustitución conferido (Archivo 8 del expediente digital).

QUINTO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, electrónicos. Parte actora andreitaremo@hotmail.com; jgomez@gomezmezaasociados.com; remolina.andrea@outlook.com; lmorales@gomezmezaasociados.com y a la entidad demandante a los correos notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y el correo paniaquacohenabogadossas@gmail.com.

SEXTO: Se informa a las partes y a los terceros intervinientes, que para todos los efectos procesales se deberán remitir los documentos a los correos electrónicos de la oficina de apoyo judicial para los Juzgados Administrativos correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y correscans2@cendoj.ramajudicial.gov.co , con el fin de efectuar la respectiva radicación en el sistema de información siglo XXI, con copia al correo admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co o jadmin21bta@notificacionesrj.gov.co . Lo anterior en virtud del artículo 8 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 y, debido a la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

CATC

Firmado Por:

Rosse Maire Mesa Cepeda
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fcf6852af1062f97ad69d9893b58afa4e733ce5210fc88adadf73b89d889cca1**
Documento generado en 15/10/2021 12:41:48 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>